

Sin tirar el niño con el agua sucia

La gratuidad, política de Estado

Por: Edgar Gutiérrez

Hay sobredemanda de servicios públicos derivada de la gratuidad y las transferencias condicionadas, las cuales comprometen a los padres a enviar a sus chicos a las escuelas y centros de salud.

Si el Ministerio de Educación y, en general, el aparato público no previeron la afluencia y, por tanto, los niños sufren hacinamiento, el problema debe corregirse rápido. Es más, debe preverse en 2010 la duplicación de instalaciones, maestros, mobiliario, material didáctico y alimentos a fin de atender en una sola jornada de ocho horas a una sola camada de niños. Es la inversión que, de veras, vale la pena.

La crítica debe limitarse a la baja velocidad –o imprevisión- con que el Gobierno atiende la sobredemanda, pues no cabe duda: debemos masificar la enseñanza. Ahora, la afluencia masiva de estudiantes inducida por los nuevos programas revela que el cobro y la falta de estímulos para ir a la escuela, eran una barrera real. Y, por otro lado, que las estadísticas tenían zonas grises. ¿Habíamos alcanzado en realidad el 96.4 por ciento de cobertura primaria como se reportó en las Metas del Milenio en 2007?

El tema es: ¿optamos o no por políticas de inclusión para mitigar la pobreza y erradicar la miseria en las próximas dos décadas? Un “sí” coloca la crítica en el plano constructivo. A partir de la actual política de gratuidad hay cosas que mejorar. Los programas acá se han montado muy rápido, como en ningún otro lugar de Latinoamérica. Y la prisa pasa facturas técnicas, aunque tiene un beneficio inmediato: la legitimidad de las comunidades. Pero la velocidad debe moderarse, pues la expansión sin institucionalidad vulgariza los programas, convirtiéndolos en modus vivendi de grupos de interés locales.

Las dudas sobre competencias legales o transparencia deben tratarse sin desmontar los programas, sin tirar el niño con el agua sucia.

A propósito de transparencia: encuestas del informe Cultura política de la democracia en Guatemala (USAID, 2006) revelaron que la segunda fuente de corrupción que irritaba a los padres de familia era el cobro en las escuelas. Se alega, por otro lado, que son programas clientelares. Los políticos están en su derecho de asumirlos así. Pero veámoslo de otra forma: si ellos tienen la mirada en los votos, la sociedad debe posarla sobre futuras generaciones mejor educadas y alimentadas que restan militantes a las maras. Por eso la gratuidad debe ser política de Estado.